



VISION[®]

F i n a n c i e r a

Edición No. 6 • Diciembre 2012

Reformas a las leyes bancarias

Pág. 8



Principios de IOSCO
y Bolsa de Valores
Pág. 4

El impacto de las
microfinanzas en Guatemala
Pág. 6

Derechos y obligaciones de los
usuarios de servicios financieros
Pág. 11



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Trabajamos para promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado



En Portada
Reformas a las leyes
bancarias
Pág. 8

Director General

Lic. Ramón Benjamín Tobar Morales
Superintendente de Bancos

Consejo Editorial

Lic. Eduardo Efraín Garrido Prado
Intendente de Supervisión

Lic. Erick Ramos Sologastoa
Intendente de Verificación Especial

Lic. Hugo Rafael Oroxóm Mérida
Intendente de Estudios y Tecnología

Lic. Julio César Gálvez Díaz
Intendente Administrativo

Lic. Víctor Hugo Castillo Vásquez
Asesor Jurídico General

Director de Proyecto

Lic. Marco Antonio Meza Leonardo
**Director del Departamento
de Proyección Institucional**

ÍNDICE

Presentación

3

Artículo

Principios de IOSCO y Bolsa de Valores

4

Opinión

El impacto de las microfinanzas en Guatemala

6

Tema Central

Reformas a las leyes bancarias
(Parte 1)

8

Entrevista

Derechos y obligaciones de los usuarios de
servicios financieros
(Parte 1)

11

Artículo

Tipologías de lavado de dinero

14

Sección Tecnológica

XBRL para la transferencia electrónica de
información financiera

16

Actualidad

Nuevas medidas de seguridad en tarjetas de
crédito

18



En el entorno globalizado de hoy en día, es innegable la acelerada evolución que han experimentado los mecanismos y herramientas financieras y tecnológicas de que disponen las sociedades, en búsqueda de su desarrollo y crecimiento. Paralelamente, en afán de lograr un orden en medio de este dinámico ambiente, los estados y organizaciones, principalmente aquellas con influencia internacional, se han dado a la tarea de impulsar principios, regulaciones y estándares que a largo plazo garanticen la sustentabilidad de los sistemas y agentes económicos y financieros, ya sea desde una perspectiva nacional, regional o internacional.

Un ejemplo de lo anterior, lo muestra la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés), que a finales de la década de los años noventa impulsó lo que a la fecha se conoce como los 38 principios de IOSCO, los cuales se basan en tres objetivos y que, a su vez, están agrupados en nueve categorías, siendo la referencia internacional para la regulación de los mercados de valores.

En este mismo orden de ideas, resulta de especial interés las reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros y a la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, las cuales buscan reforzar el régimen de autorización y funcionamiento de las entidades bancarias, fortalecer aspectos prudenciales y promover la disciplina de mercado, entre otros.

De igual forma, reviste importancia temas emergentes en nuestra cultura financiera, como las microfinanzas, cuyo impacto trasciende en los distintos estratos del medio nacional; o bien, desde una perspectiva tecnológica, los formatos estándar para el intercambio de información financiera, que se basan en el uso de internet y ambientes web, como lo es el lenguaje extensible de informes de negocios, conocido como XBRL por sus siglas en inglés.

Sin duda, todo esfuerzo se encamina a vencer algunos flagelos que aquejan a nuestra sociedad, tal es el caso del lavado de di-

nero o los fraudes financieros a través de tarjetas de crédito, cuyas diferentes tipologías, complejidad y dinamismo empleados por las personas dedicadas a estas actividades delictivas, refuerzan la necesidad de contar con medidas de seguridad preventivas, de investigación y combate eficaces contra estos delitos.

Resulta claro que el conocimiento por parte de los usuarios de los servicios financieros, respecto a sus derechos y obligaciones es una de las principales armas con que cuenta la sociedad, a fin de generar una cultura financiera y con ello garantizar la estabilidad y confianza en el sistema financiero nacional. Por ende, este tema requiere un impulso múltiple, donde se cuente con la participación de los distintos sectores de la sociedad.

Los temas anteriores, son abordados en los distintos artículos incluidos en esta edición de Visión Financiera, los cuales han sido redactados en su mayoría por expertos que conforman parte del equipo profesional de trabajo de la Superintendencia de Bancos.

Estimado lector, sin duda encontrará en las páginas siguientes, una rica fuente de conocimientos de actualidad, que contribuirán significativamente a su acervo de un modo amplio y técnico. Desde ya, cuente con nuestra disposición para ampliar la información aquí expresada, diligenciando sus requerimientos por la vía de nuestra Oficina de Atención al Usuario, donde con gusto canalizaremos oportunamente sus inquietudes.

Atentamente,

Lic. Ramón Benjamín Tobar Morales
Superintendente de Bancos

Principios de IOSCO y Bolsa de Valores

Por: Lic. Sergio René Núñez Ramírez, *
Contador Público y Auditor, Magíster Artium en Derecho Mercantil



PRINCIPIOS DE IOSCO

La búsqueda de capital para financiar a las empresas y a los estados así como la colocación de los excedentes de liquidez de las personas y empresas no reconoce fronteras, es decir, trasciende prácticas y sistemas legales locales. El escenario descrito implica barreras que limitan la libre circulación, transferencia y movilización de los capitales entre los países ya que cada uno tiene leyes y normas particulares que no siempre son compatibles. Para superar esta dificultad, es imprescindible contar con un estándar internacional que permita uniformidad de reglas, acuerdos y convenios entre los diversos países.

International Organization of Securities Commissions – IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores – OICV), es ampliamente aceptada como la entidad que emite el estándar internacional en materia de mercado de valores; además, constituye el principal foro de cooperación para los órganos reguladores del mundo en este mercado.

En 1998 se promulgaron los Objetivos y Principios para la Regulación de los Mercados de Valores, conocidos como los 30 Principios de IOSCO, los cuales se reconocen como la referencia internacional para la regulación del mercado de valores. En 2003 se aprobó la Metodología para Evaluar la Implantación de los Objetivos y Principios de IOSCO para la Regulación de los Mercados de Valores, que permite determinar el grado de cumplimiento de dichos principios en la jurisdicción de sus miembros y el desarrollo de planes de acción para corregir las deficiencias detectadas.

Con motivo de la crisis financiera de 2008 se realizó una revisión de los principios, dando como resultado su reestructuración y la adición de ocho de ellos, emitiéndose en 2010 una nueva versión de los Objetivos y Principios para la Regulación de los Mercados de Valores (38 Principios), lo cual implicó la revisión de la metodología de evaluación y en 2011 se emitió una nueva Metodología para Evaluar la Implantación de los Objetivos y Principios de IOSCO para la Regulación de los Mercados de Valores.

Los principios para la regulación del mercado de valores se basan en tres objetivos:

- 1) Protección de los inversionistas;
- 2) Garantizar que los mercados sean justos, eficientes y transparentes;
- 3) Reducción del riesgo sistémico.

Los 38 Principios están agrupados en nueve categorías, como se indica a continuación:

- a. Principios relativos al regulador;
- b. Principios para la autorregulación;
- c. Principios relativos a la aplicación de la regulación del mercado de valores;
- d. Principios relativos a la cooperación;
- e. Principios relativos a los emisores;
- f. Principios relativos a los auditores, calificadoras de riesgo y otros proveedores de servicios de información;
- g. Principios relativos a las instituciones de inversión colectiva;
- h. Principios relativos a los intermediarios del mercado;
- i. Principios relativos al mercado secundario.

La descripción de cada uno de los 38 Principios puede consultarse en el documento “*Objectives and Principles of Securities Regulation, June 2010*” de IOSCO, en la página web de la organización: <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD323.pdf>

BOLSA DE VALORES

Un mercado de valores organizado está integrado por varias entidades debidamente autorizadas, entre ellas la bolsa de valores, el depositario central de valores, las casas de bolsa, la entidad de compensación y liquidación, y el órgano de supervisión. La organización y el funcionamiento de estas entidades están establecidos en un marco de regulación específica.

La bolsa de valores cumple una función esencial en la negociación de instrumentos financieros, ya que por medio de su infraestructura física o virtual los agentes o casas de bolsa ponen en contacto a emisores e inversionistas, se establece el precio de dichos instrumentos y se divulga al público.

Para su funcionamiento las bolsas de valores comúnmente deben cumplir con varios requisitos, entre otros:

- a) Inscripción en el Registro del Mercado de Valores;
- b) Capital pagado mínimo inicial;
- c) Directores y altos funcionarios con capacidad técnica, experiencia y honorabilidad;
- d) Autorización del órgano de supervisión para su constitución y funcionamiento.

Las funciones más comunes de las bolsas de valores son:

- a) Proporcionar los sistemas, mecanismos y servicios necesarios para facilitar la negociación de valores;
- b) Divulgar los precios de los valores cotizados;
- c) Mantener y proporcionar información de emisores y casas de bolsa;
- d) Registro de oferta pública;
- e) Dar seguimiento al comportamiento de la negociación de los valores.

Los Principios de IOSCO que tienen relación con la Bolsa de Valores están comprendidos en el grupo de principios relativos al mercado secundario, que comprende: **Principio 33.** El establecimiento de sistemas de negociación, incluyendo las bolsas de valores, estará sujeto a autorización y supervisión reguladora. **Principio 34.** Existirá una supervisión constante de las bolsas y los sistemas de negociación con objeto de asegurar que se mantiene la integridad de la negociación mediante normas justas y equitativas que logren un equilibrio adecuado entre las necesidades de los distintos participantes del mercado. **Principio 35.** La regulación promoverá transparencia de la negociación. **Principio 36.** La regulación estará diseñada para detectar e impedir la manipulación y otras prácticas desleales en la negociación. **Principio 37.** La regulación tendrá por objeto asegurar la gestión de los grandes riesgos, el riesgo de incumplimiento y la distorsión del mercado.

Las bolsas de valores comúnmente desarrollan su actividad bajo el sistema de autorregulación, el cual está contenido en el Principio 9, que se refiere a los Principios para la Autorregulación.

* El Lic. Núñez Ramírez es funcionario del Departamento de Estudios de la Superintendencia de Bancos. Licenciado en Contaduría Pública y Auditoría, y Magister Artium en Derecho Mercantil. Experiencia laboral en auditoría interna de banca privada, y supervisión de entidades financieras y elaboración de normativa prudencial en la Superintendencia de Bancos.

El impacto de las microfinanzas en Guatemala

Por: Lic. Jorge Eduardo Soto Guzmán,*
Master en Gestión Empresarial con especialidad
en Microfinanzas



En Guatemala las microfinanzas son ejecutadas, principalmente, por tres tipos de entidades, a saber: bancos, instituciones de microfinanzas especializadas (IMFs) y cooperativas de ahorro y crédito (CACs).

Durante la última década, el impacto de las microfinanzas ha sido objeto de análisis y estudio a nivel internacional a fin de conocer el grado de contribución de las mismas al desarrollo de los países y, particularmente, en su apoyo para la superación de los niveles de pobreza en las diferentes jurisdicciones.

Conviene aclarar que, al citar los esfuerzos de las entidades que operan programas de microfinanzas, coadyuvando en la superación de los niveles de pobreza de un país determinado, se excluyen programas de subsidiariedad dirigido a estratos de la población en extrema pobreza, mismos que, por su naturaleza, objeto y grupo poblacional meta, son dirigidos y ejecutados directamente por los gobiernos.

En ese sentido, pareciera ser que el consenso a nivel internacional va orientando a que la medición del impacto de las microfinanzas debe analizarse desde la perspectiva de la atención a las capas poblacionales que viven por encima de la línea de pobreza, es decir, con más de un dólar de los Estados Unidos de América, al día (US\$1.00).

Considerando lo anterior y para conocer de mejor manera el impacto de las microfinanzas en Guatemala, la Superintendencia de Bancos contrató en el año 2009, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una consultoría específica que tuvo como fin la realización de un estudio y diagnóstico de microfinanzas en Guatemala, así como una propuesta de enfoque y conceptos que debiera recoger un proyecto de ley de microfinanzas, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de dicha actividad.

La consultoría citada permitió contratar al Dr. Felipe Morris, profesional docto en la materia, para realizar dicho estudio y análisis de impacto de las microfinanzas en el país, dando como re-

sultado un informe detallado que conllevó un trabajo de campo a nivel nacional que, por primera vez, incluiría un estudio a nivel urbano, periurbano y rural.

En forma resumida, el documento final fue dividido en dos grandes apartados:

- a) Un diagnóstico del mercado de las microfinanzas en Guatemala; y,
- b) Análisis de marco legal aplicable a la actividad en el país y propuestas de enfoque para el desarrollo de un proyecto para regular a las entidades operadoras de microfinanzas.

En lo que respecta a la primera literal, el documento concluye que el papel que juegan las entidades operadoras de programas de microfinanzas en el territorio nacional es relevante, coadyuva en los esfuerzos por superar los niveles de pobreza en el país, promueve emprendimientos microempresariales y forma al microempresario, a través de los servicios de desarrollo empresarial asociados a las diferentes metodologías de microcrédito que se aplican. Adicionalmente a lo expresado en el citado documento, debiéramos considerar que a través de este tipo de operadores se canalizan de mejor manera las políticas de inclusión financiera, pues precisamente por los segmentos de mercado hacia los cuales se dirigen, permite que la población que no es objeto de atención por parte del sistema financiero tradicional, encuentre la atención debida y el contacto con instrumentos de apoyo crediticio acorde a sus necesidades, en muchos casos, por primera vez.

A pesar de lo anterior y de las buenas prácticas que pudieran identificarse, el diagnóstico del Dr. Morris indica que los operadores existentes en el mercado sufren falencias producto de causas internas procedimentales, otras por razones estructurales y algunas otras derivadas de factores externos, tales como el marco regulatorio aplicable o la ausencia de éste, de donde deviene la necesidad de crear nuevos instrumentos regulatorios que permitan la formalización de los practicantes de microfinanzas.

Considerando que en Guatemala las microfinanzas son ejecutadas, principalmente, por tres tipos de entidades, a saber: bancos, instituciones de microfinanzas especializadas (IMFs) y cooperativas de ahorro y crédito (CACs); se hace necesario tomar en

cuenta esta desagregación para estudiar su perfil operacional y, en consecuencia, su impacto en la sociedad, sus limitantes y perspectivas futuras.

En ese sentido y considerando la clasificación referida, podríamos catalogar a las microfinanzas como comerciales (bancos), productivas (IMFs) y sociales (CACs). Las primeras, indudablemente orientadas, de forma principal, a la pequeña y mediana empresa; las segundas dedicadas a la atención en la micro y pequeña empresa; y, finalmente, las últimas especializadas a la atención financiera de sectores sociales específicos y, al mismo tiempo, empoderándoles con la participación de propiedad de las mismas.

Finalmente, he considerado concluir que independientemente del tipo de operador, las microfinanzas juegan un papel importante en la oxigenación financiera al entretejido microempresarial nacional generando un impacto positivo en la sociedad actual; en consecuencia, apoyar su desarrollo, promover las buenas prácticas y fortalecer la institucionalidad entre los operadores, se convierte en un deber de índole social.



*El Lic. Soto es Contador Público y Auditor por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Realizó sus estudios de maestría en la Universidad Internacional de Andalucía, España, donde obtuvo el título de Master en Gestión Empresarial, con especialidad en Microfinanzas acreditando mención honorífica. Asimismo, es egresado del INCAE del Programa de Alta Dirección de Entidades Microfinancieras (PADMIF).

Reformas a las leyes bancarias

(Parte 1)

Por: Lic. Luis Felipe Villatoro M.
Contador Público y Auditor, con estudios en banca
central y en administración financiera.*



La última reforma financiera en Guatemala vigente a partir de junio de 2002, incluyó la emisión de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, Ley de Supervisión Financiera, Ley Orgánica del Banco de Guatemala y la Ley Monetaria con un enfoque basado en estándares internacionales y de banca moderna. Han transcurrido diez años de su aplicación que han permitido identificar aspectos que requieren fortalecerse a la luz de la evolución de los mercados y de la tecnología, así como de las lecciones aprendidas de las recientes crisis financieras internacionales, lo que ha revelado la necesidad de contar con un marco regulatorio bancario más sólido y prudente.

En ese sentido, el Decreto Número 26-2012 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario de Centroamérica el 26 de septiembre de 2012 y que entrará en vigencia el 1 de abril de 2013, reformó 21 artículos de la Ley de Bancos y Grupos Financieros y un artículo de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, con el objetivo de hacer más eficiente y prudente el marco legal, a través de reformas que persiguen reforzar el régimen de autorización y funcionamiento de las entidades bancarias, fortalecer aspectos prudenciales, promover la disciplina de mercado y ampliar los mecanismos de resolución bancaria, de los cuales los principales cambios se citan a continuación.

A. RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES BANCARIAS

A.1 Personas jurídicas como accionistas de nuevas entidades bancarias

Dentro del proceso de autorización de nuevas entidades ban-

carias, así como de entidades en marcha, se aceptará a las personas jurídicas como accionistas de bancos, siempre que coticen en mercados regulados y supervisados y cuenten con una calificación de riesgo internacional. Ello permitirá que aunque no se conozca el nombre de la persona individual que sea la propietaria final de las acciones, requisito general para las personas jurídicas, se tendrán accionistas calificados por calificadoras reconocidas por la Comisión de la Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que por participar en mercados desarrollados su capital se integra por una gran cantidad de accionistas que pueden cambiar frecuentemente. Además, esta apertura facilitará la inversión extranjera en la banca guatemalteca a través de empresas que están sujetas a requisitos estrictos de información en sus mercados.

A.2 Beneficiarios de cuentas de depósito

La reforma adiciona un artículo para regular el tratamiento de los beneficiarios de las cuentas de depósitos monetarios, de ahorro y a plazo para recibir el saldo en caso de muerte del titular, tal como ya existe legalmente para beneficiarios en el caso de las pólizas de seguro. Con ello se acelera el proceso de entrega de tales recursos a las personas que fueron designadas para recibirlos.

A.3 Destino de las cuentas de depósito inactivas

Este decreto crea un artículo para el tratamiento que debe darse a las cuentas de depósitos monetarios y de ahorro, en las cuales el titular no haya efectuado transacciones de depósito o retiro por un período de 10 años, y que sean inferiores a Q1,000.00 o



US\$125.00, según su moneda. Estos recursos ingresarán al Fondo para la Protección del Ahorro.

A.4 Operaciones de las entidades fuera de plaza o entidades off shore

Otro aspecto de la reforma es el alcance del funcionamiento de las entidades fuera de plaza, las cuales, como todos sabemos, son entes que forman parte de Grupos Financieros en Guatemala, pero la licencia bancaria ha sido otorgada en otros países y se les permite operar en Guatemala, únicamente si forman parte de un grupo financiero autorizado por Junta Monetaria. En este sentido, por su naturaleza legal, es conveniente que el tipo de clientes de estas entidades sean de un segmento de la población que maneje suficiente información acerca de los riesgos específicos en este tipo de operaciones, con lo que se estarán protegiendo los recursos de los pequeños depositantes, sean en dólares o en quetzales, ya que éstos, de ser trasladados a un banco del país, estarían cubiertos por el FOPA. Para este efecto, la reforma legal establece un monto mínimo de US\$10,000.00, que deben mantener los depositantes como saldo promedio mensual, o para aperturar una cuenta de depósitos en una entidad *off shore*. Otro aspecto que se ha modificado y es conveniente que el público conozca es que las obligaciones depositarias y otros pasivos que tengan las *off shore*, estarán sujetos al régimen legal del país en el cual se constituyó o se registró la *off shore*.

A.5 Préstamos temporales del Banco de Guatemala

La modificación de las condiciones de la función de prestamista de última instancia del Banco de Guatemala vendrá a darle un rol más activo al banco central en la asistencia financiera a las entidades y a la vez facilitará esta opción para aquellas entidades que enfrentan problemas coyunturales de liquidez. Esto se promoverá mediante la ampliación del cupo disponible de financiamiento en virtud que la base para calcular el monto del crédito máximo se modificó para ser hasta el equivalente del 100% del encaje requerido, mientras que la base anterior era el 50% del patrimonio computable de los bancos. En este mismo sentido, se han adicionado los títulos valores como garantías, los cuales también deben ser de la más alta calidad y se ha ampliado el plazo de estos créditos de 30 a 60 días, para darle mayor viabilidad al esquema en virtud de la iliquidez temporal que atraviesa una entidad.

A.6 Revocatoria de autorización de funcionamiento para las entidades off shore

Esta reforma fortalece el proceso para revocar la autorización de funcionamiento de estas entidades, ya que en la modificación legal hace obligatoria para la Junta Monetaria revocar la autorización cuando ocurran uno o más de los casos que se describen en la ley. Al respecto, cabe comentar que estos casos ya estaban siendo aplicados con base en el reglamento emitido por Junta Monetaria, con excepción de la deficiencia patrimonial de más del 50% del patrimonio de la entidad, y con esta reforma fueron elevados a rango de ley.

B. ASPECTOS PRUDENCIALES

B.1 Límites para la concentración de inversiones y contingencias

Esta reforma incorpora la aplicación de los límites de concentración a las *off shore* y a las empresas especializadas en servicios financieros que formen parte de grupos financieros, dándoles consistencia con las reglas aplicables a bancos y sociedades financieras.

En cuanto a los límites de las unidades de riesgo, entendidas éstas como dos o más personas individuales o jurídicas que forman un grupo, se hace una separación de las unidades que son vinculadas al banco y las que no lo son. En lo relativo a las unidades vinculadas la modificación legal aclara que todas aquellas personas que sean vinculadas constituirán una sola unidad de riesgo y, por lo tanto, todos los accionistas y sus empresas vinculadas tendrán límite máximo de financiamiento, que en conjunto sería el 30% del patrimonio de la entidad.

Asimismo, se crea un límite para las *off shore* hasta del 30% para invertir en títulos de deuda soberana de otros países, el cual se otorgará conforme una escala que será reglamentada por la Junta Monetaria, según sea el grado de calificación de riesgo de cada país. Con ello, se podrá diversificar las inversiones en deuda soberana, con la prudencia de que en la medida que los países estén calificados como de mayor riesgo, se tendrá un porcentaje menor de inversión permitida.

La reforma también incentiva mejores inversiones de los bancos y financieras al permitir un límite de 100% de su patrimonio cuando inviertan en deuda soberana de países calificados como AAA o su equivalente, siendo éste un criterio más conservador que el aplicado a la deuda de Guatemala, la cual no tiene límites. Finalmente, el decreto de reforma contempla una disposición acorde con estándares internacionales que todo financiamiento a personas vinculadas deberá ser aprobado por el Consejo de Administración de la entidad.

B.2 Distribución de dividendos de bancos, financieras y entidades *off shore*.

Esta reforma ha otorgado facultades al supervisor que le permitirán actuar oportunamente en aquellas entidades que tengan problemas de liquidez y solvencia y en las cuales sea contraproducente distribuir utilidades. Con ello se reduce el riesgo de incumplimiento de las obligaciones con los depositantes.

B.3 Composición del patrimonio de los bancos

El patrimonio computable de los bancos, es decir el capital con que deben contar para respaldar los riesgos que asumen, se

integra por el capital primario, o de naturaleza permanente, y capital complementario.

La reforma ha hecho más conservador el cálculo de este patrimonio, en virtud que se han agregado, con efecto de deducción en el patrimonio, las inversiones en casas de bolsa y en *off shore*, así como en empresas de apoyo al giro bancario, cuando en éstas últimas se supere el 25% del capital total.

Además, se hace más sólida la composición del capital primario, ya que debe estar compuesto únicamente por otras aportaciones permanentes de capital, con lo cual se descarta que alguna institución incluya en este capital aquellos instrumentos híbridos o de naturaleza mixta, los cuales tienen componentes de deuda y consecuentemente son de naturaleza más volátil. Asimismo, para efectos de aceptación en el patrimonio, la deuda subordinada tendrá una degradación de valor del 20% anual a partir de los últimos cinco años de su vigencia hasta llegar a su vencimiento. Lo anterior en virtud que cuando una deuda subordinada esta a punto de vencer, se asemeja más a una deuda normal, por lo que no debería aceptarse en el patrimonio computable de un banco.

En la reforma también se han adicionado los bonos que combinen características de deuda y de capital como un componente del capital complementario, lo cual es consistente con la modificación de las otras aportaciones permanentes citadas con anterioridad.

Finalmente, se faculta a la autoridad monetaria para que pueda agregar otros componentes en el capital complementario, así como regular las características de éstos, en virtud que la dinámica e innovación de los mercados financieros podrían dar nacimiento a otras figuras que puedan considerarse dentro de este capital.

Continuará en la próxima edición...



* El Lic. Villatoro Morga es Contador Público y Auditor egresado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala con estudios en banca central y en administración financiera. Se ha desempeñado en la Superintendencia de Bancos desde el año 1989, en donde participó en la elaboración de los proyectos de la reforma financiera del año 2002, que incluyen la Ley de Bancos y Grupos Financieros y la Ley de Supervisión Financiera.

Derechos y obligaciones de los usuarios de servicios financieros

(Parte 1)

Entrevistado por: Lic. Edi Orlando Pineda Ramírez,*
MAF y Msc.



Lic. Guillermo Romano Rivero¹

Estamos en un mundo globalizado donde los productos y servicios financieros que prestan las entidades financieras están siendo puestos cada vez más al alcance de la población, con mecanismos de inclusión financiera bastante fuertes y ambiciosos, y en donde los usuarios con más frecuencia están haciendo valer sus derechos bajo diferentes esquemas de protección, transparencia y disciplina de mercado, que en la mayoría de los casos ha dado lugar a que los diferentes actores dentro de los sistemas financieros promuevan y promulguen documentos que enuncian las buenas prácticas en las relaciones entidad financiera / usuario; así como, la emisión de normativas o leyes tendentes a regular dichas relaciones.

Bajo este esquema, es importante conocer y profundizar la importancia de los “Derechos y obligaciones de los usuarios de servicios financieros”, para la buena marcha del sistema financiero de los países, sobre todo el guatemalteco, en cuanto a las interrelaciones con los usuarios; por lo que en esta oportunidad se entrevista al licenciado Guillermo Romano Rivero, como experto en la materia, para obtener sus apreciaciones, algunas respuestas respecto del tema, pero sobre todo, las lecciones aprendidas del mismo.

1. ¿Considera que los derechos y obligaciones de los usuarios de servicios financieros es un tema de importancia al cual se le debe prestar atención por parte de los entes reguladores y supervisores de los sistemas financieros, así como por parte de las propias entidades financieras. Por qué?

Hoy en día las entidades financieras, particularmente en la región latinoamericana, están enfrentando la realidad de la inclusión financiera, entendida ésta como la prestación de los servicios finan-

cieros (ahorro, crédito y conexos) a una, cada vez mayor, cantidad de la población de los distintos países. Debemos tomar en cuenta que venimos de una realidad opuesta, dado que hace tan sólo 15 o 20 años la banca comercial tradicional sencillamente no atendía a los grandes sectores de la población de menores ingresos, concentrando su esfuerzo comercial en las grandes empresas, en las corporaciones nacionales y multinacionales; y, en la población de mayores ingresos, básicamente con productos crediticios tradicionales.

La inclusión financiera supone una serie de retos y reflexiones para los distintos actores dentro de una economía. En este contexto, los reguladores y supervisores del sistema financiero deben crear las condiciones normativas, en algunos casos, para dar paso a nuevos intermediarios financieros o a nuevos productos y servicios financieros orientados a la población objetivo, lo que conlleva a profundizar en los temas de los derechos y obligaciones de los usuarios de servicios financieros; así como, a desarrollar programas y campañas de educación financiera, hoy tan necesarias.

Por su parte, las entidades financieras deben prepararse para el gran reto de la inclusión financiera, en el corto o mediano plazo, ampliando sus canales de distribución, adoptando sistemas apropiados y capacitando a su recurso humano con una orientación más dirigida a las relaciones interpersonales; lo cual, representa obviamente una mayor inversión, que será ampliamente justificada y redituada con mayores volúmenes de intermediación.

Indiscutiblemente, todo este esfuerzo debe ser acompañado por un compromiso y una sincera reflexión en cuanto a los costos financieros a los que van a enfrentarse una gran cantidad de nuevos usuarios de servicios financieros que poco conocen sobre sus derechos, obligaciones y el funcionamiento de determinados productos o servicios financieros; y que, van a destinar una parte de sus bajos ingresos a cubrir dichos costos.

En este marco, para generar mayor confianza de la población en los sistemas financieros, los países de la región están resaltando la importancia de los derechos y obligaciones de los usuarios de productos y servicios financieros, quienes deben tener la certeza de que sus derechos como consumidores, van a ser respetados por las entidades financieras y que éstas van a brindarle un servicio de calidad y van a demandar el cumplimiento de las obligaciones que asuman, en pleno conocimiento y con amplia información sobre las mismas.

2. ¿Cuál considera que es la principal causa por la que los usuarios de servicios financieros manifiestan su insatisfacción o inconformidad?

Considero que la falta de información precisa y relevante es la principal causa por la que los usuarios manifiestan permanentemente su inconformidad y que ocasiona un gran perjuicio a la relación entidad financiera / usuario. Por ello, es importante promover y promulgar una normativa que impulse de manera efectiva la transparencia en el sistema financiero. Y cuando hablamos de transparencia, siempre es bueno pensar en que se debe promover

la transparencia en dos niveles. Por una parte, una transparencia de mercado que permita contar con información general sobre las distintas entidades financieras y los diferentes productos y servicios que ofrecen, a efecto de hacer comparaciones para la adecuada toma de decisiones por parte del usuario; y, por otra, una transparencia de información en la relación individual con el usuario financiero, quien debe conocer principalmente la tasa de interés efectiva que deberá pagar por los productos crediticios que ha contratado y los demás cargos administrativos y financieros a que está sujeto su crédito; así como, información adecuada y clara de sus derechos y obligaciones contractuales.

La transparencia de mercado es clave para el normal desarrollo del sistema financiero, pero lo es también la transparencia contractual con el usuario. Cada vez más los países se están dando a la tarea de revisar en detalle los contratos de adhesión con el objeto de evitar posibles incumplimientos con la ley general de protección al consumidor, cuyos principios fundamentales deben ser observados en los contratos financieros, pero también con el objeto de evitar y abolir ciertas cláusulas abusivas que van en contra de los derechos y obligaciones de los usuarios; ya que éstos deben estar igualmente protegidos, frente a la Ley, que los consumidores generales de productos y servicios no financieros.

3. ¿Cuáles considera que son los derechos y obligaciones más importantes que deben observarse en una relación entidad financiera / usuario; y cómo éstos se enmarcan en las responsabilidades que cada actor debiera tener en un esquema de protección al usuario, de transparencia de mercado o ambos?

Así como la falta de información es una de las principales causas de inconformidad y reclamo, precisamente el acceso a información relevante es uno de los principales derechos de los usuarios de servicios financieros. El usuario debe tener el derecho pero también la obligación de informarse sobre las condiciones generales y particulares que ofrecen las entidades financieras en sus productos y servicios, para con ello tomar la decisión más adecuada, según sus intereses. Pero se debe reflexionar que, allá donde nace un derecho también nace una obligación, en este caso para las entidades que deben brindar información adecuada, precisa y oportuna, antes, durante y después de firmar los diferentes contratos con los usuarios.

Un derecho importante también será la libertad de elección de los productos y servicios financieros disponibles en el sistema que mejor respondan a las necesidades particulares de los usuarios.



Dentro de las obligaciones importantes que contraen los usuarios de servicios financieros, están: la de evitar endeudarse de forma excesiva con las entidades financieras e inclusive con particulares, velando por la economía y el bienestar financiero de su hogar; cumplir religiosa y puntualmente con los pagos convenidos en los créditos obtenidos; y, suministrar información verdadera, suficiente y oportuna sobre su fuente de ingresos.

Por su lado, las entidades, deben contar con la infraestructura adecuada para recibir y atender los reclamos de sus usuarios de manera eficiente y oportuna; velando siempre por la búsqueda de una solución efectiva, en beneficio de ambas partes.

4. ¿Cree necesaria la emisión y observancia de un código de buenas prácticas que regule las relaciones financieras de las entidades y los usuarios. Qué aspectos de importancia debería contener dicha normativa?

Así como existe una legislación general de protección al consumidor, deben existir normas claras que establezcan los derechos y obligaciones en la relación contractual con los usuarios y las diferentes entidades financieras. Sin embargo, a falta de una ley específica sobre protección al usuario de servicios financieros, una normativa emitida por el regulador cumpliría el cometido de establecer dichas normas sobre la materia. La promoción y promulgación de un código de sanas o buenas prácticas de aplicación por parte de las entidades financieras, representaría, un compromiso de la industria por su buena implementación y observancia.

Los principales aspectos que debería contener un cuerpo normativo de esta naturaleza son justamente la definición clara de los derechos y obligaciones de los usuarios de servicios financieros, de las entidades que proveen los productos y servicios financieros y los mecanismos convenidos para la supervisión y el control.

Continuará en la próxima edición...

¹El Lic. Romano es boliviano, Economista con Maestría en Finanzas Bancarias de la Universidad Católica Boliviana, con experiencia de más de 20 años en regulación y supervisión financiera. Trabajó en la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, como Jefe de Análisis Financiero, Estadísticas y Central de Riesgos, Jefe de División de la Intendencia de Estudios y Normas. En abril de 2004 fue incorporado a la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), con sede en la Ciudad de México, como Encargado de Estudios e Implementación. Se reintegró a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia como Intendente de Coordinación Externa, responsable del desarrollo de un marco regulatorio para la protección de los derechos de consumidores financieros y del Servicio de Atención al Cliente (SARC). Ha desarrollado diversas consultorías en temas de Supervisión y Regulación Bancaria en Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Marruecos, Uganda y Venezuela. Actualmente, en el campo de la protección de consumidores financieros y la educación financiera, evaluó y diseñó Programas de Fortalecimiento en Ecuador, Guatemala, Honduras y Panamá.

^{*} El Lic. Edi Pineda, es Contador Público y Auditor con estudios de maestría y posgrado en Administración Financiera, Tecnologías del Aseguramiento y Reingeniería, e Ingeniería de Negocios. Con especialización en la gestión de riesgos financieros. Encargado del Área de Gestiones de Usuarios del Departamento de Estudios de la Superintendencia de Bancos.

Tipologías de lavado de dinero

Por: Lic. José Rubén Ramírez Molina,*
Contador Público y Auditor, Magíster en Finanzas

El lavado de dinero es un flagelo que ha venido afectando las economías de los países de modo negativo, introduciendo en el sistema flujos de dinero provenientes de actividades ilícitas, utilizando diversos métodos o técnicas para encubrir el verdadero origen de los fondos, a lo cual se le ha denominado “Tipologías de Lavado de Dinero” o “Tipologías de Lavado de Activos”. El lavado de dinero es negativo para la sociedad, debido a que atenta contra la seguridad nacional, regional e internacional, ocasionando altos costos a las naciones para su combate, lo cual se materializa en la utilización de recursos económicos y pérdida de vidas humanas.

Según el estudio “Seguridad y Crimen Organizado Transnacional”, datos publicados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública de El Salvador, señalan que la violencia tuvo un costo total en 2006 de US\$6,506 millones, equivalentes al 7.7% del PIB regional del istmo centroamericano, siendo El Salvador el país más afectado, con un costo cercano al 11% del PIB, seguido por Honduras y Nicaragua (alrededor de 10%), por Guatemala (cerca de 8%) y a la distancia, por Costa Rica (menos de 4%), hecho que en gran parte está determinado por las luchas territoriales de los cárteles, así como por las redes de distribución de drogas al por menor, extorsiones, entres otros.

La complejidad y dinamismo de las técnicas utilizadas por los delincuentes para lavar dinero hace que los organismos o entidades encargados de la prevención y represión del lavado de dinero (LD), tengan que ir implementando mecanismos para identificar, controlar y mitigar el riesgo, tomando de base las cuarenta recomendaciones del GAFI, atendiendo al ordenamiento legal y económico de cada país.

Aunado a lo comentado en el párrafo anterior, las tipologías para lavar dinero, que han sido identificadas y divulgadas por las organizaciones como GAFI (GAFIC y GAFISUD) y unidades de análisis financiero (UAF) o unidades de inteligencia financiera (UIF), contribuyen a tener mayores elementos de juicio para identificar operaciones que están vinculadas con el lavado

de dinero y ser más efectivos en la prevención y represión del mismo, sin dejar de tomar en cuenta que la forma de operar de las organizaciones criminales va evolucionando de acuerdo con las circunstancias que se van dando en los ámbitos de seguridad nacional, legal y económica de los países, entre otros aspectos.

Dentro del contexto de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el documento “Tipologías regionales GAFISUD – 2010” define como tipología, lo siguiente: **“(...) se entiende la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales”**. Cabe aclarar que estas estructuras criminales, mezclan dinero de procedencia ilícita con lícita para encubrir sus actividades delictivas.

Las tipologías, para su comprensión, constan de cinco elementos fundamentales, que se describen a continuación (tomado del documento “Tipologías regionales de GAFISUD-2010”): **Nombre de la tipología.** Conceptualiza el mecanismo utilizado por la organización criminal para lavar dinero. **Descripción genérica.** “(...) explicación del proceso “lavado de activos” utilizado por los delincuentes en el desarrollo de cada una de las tipologías”. **Señales de alerta.** “(...) elementos que permiten detectar la posible presencia de operaciones de “lavado de activos” relacionadas con la tipología descrita.” **Descripción del caso.** Presentación de “(...) un caso de una tipología, utilizando nombres genéricos para nombrar las personas, ciudades, entidades o países.” **Diagrama del flujo.** “representación gráfica del caso.”

Derivado de las funciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) como unidad de análisis financiero (UAF) de Guatemala, creada dentro de la Superintendencia de Bancos, se han identificado tipologías que son similares a las identificadas por GAFISUD y GAFIC. Verbigracia: Traslado de dólares en efectivo, estructuración de depósitos en dólares en efectivo, participa-

ción de un funcionario bancario, cobro de extorsiones por medio de productos financieros, utilización de tarjetas prepago y corrupción.

Como ejemplo se describen las tipologías de traslado de dólares en efectivo y la de extorsión:

Traslado de dólares en efectivo.



La tipología se refiere al traslado de dólares en efectivo hacia varios países centroamericanos, utilizando para el efecto los aeropuertos, y la posterior legitimización en el país destino, adquiriendo bienes y servicios de una forma lícita. Para el traslado del dinero, se utilizan personas individuales, quienes llevan consigo los dólares en efectivo, justificando la salida con una carta poder extendida por empresas de fachada y en el documento se indica que la persona realizará compras a nombre de la entidad en el país de destino.

Las señales de alerta mencionadas en esa tipología son: empresas constituidas en la misma fecha y ante el mismo notario; el representante legal es la misma persona para todas las empresas; la dirección reportada es la misma para todas las entidades, y se ubican en la oficina de un bufete de abogados, en otros casos en casas de habitación y direcciones falsas; documentos para justificar la salida de dólares en efectivo con firma legalizada por un notario; fuertes sumas de dinero en efectivo; personas de un rango específico de edad y estrato social; y, alta frecuencia en ingresos y egresos de las mismas personas al país.

Cobro de extorsiones por medio de productos financieros.

Un criminal u organización criminal (extorsionistas) bajo amenazas, exigen a sus víctimas una cantidad de dinero, para lo cual

utiliza los diferentes productos y servicios que ofrece una entidad bancaria, la que posteriormente es retirada en su totalidad en una o varias agencias o por medio de cajeros automáticos.

Algunas señales de alertas son: comportamiento transaccional no acorde al perfil económico financiero del titular del producto; depósitos realizados en forma periódica, en efectivo y regularmente por valores exactos; realización de depósitos sin libreta en una cuenta de ahorro, efectuados por un tercero; depósitos realizados en agencias ubicadas en áreas geográficas diferentes a la residencia y/o lugar de trabajo del titular del producto; retiro inmediato de los fondos en agencias diferentes a las utilizadas para la realización de los depósitos, o por medio de cajeros automáticos; recepción de remesas ordenadas por múltiples personas ubicadas en diversas regiones del país o Centroamérica, con las que no evidencia relación comercial o familiar; declaración del depositante u ordenante de remesa, de ser víctima de extorsión; publicaciones de prensa en donde se relaciona al beneficiario de los depósitos o remesas de estar involucrado en un hecho delictivo; y, las transferencias son enviadas desde lugares que según publicaciones de prensa reportan el mayor número de denuncias por extorsión.

Es importante mencionar que las tipologías muestran comportamientos de las estructuras criminales para lavar dinero, lo cual ayuda para mejorar controles, observando las señales de alerta y ampliar los criterios a tomar para el conocimiento del cliente o clientes; pero, no deben de utilizarse como un juicio de responsabilidad penal, lo cual le corresponde establecer a las autoridades competentes luego del proceso correspondiente.



*Lic. José Rubén Ramírez Molina, funcionario de la Superintendencia de Bancos, actualmente es Supervisor del Área de Transacciones Financieras II, de la Intendencia de Verificación Especial.

XBRL para la transferencia electrónica de información financiera

Por: Msc. Norma Elizabeth Díaz Celis,*
Master en Sistemas de Información y Base de Datos
Ing. Estuardo Enrique Herrera Chacón,**
Ingeniero en Sistemas de Información

La necesidad de un estándar digital para el intercambio de información contable, entre aplicaciones de *software*, se acentúa al tratar de integrar múltiples datos procedentes de estados financieros publicados en diversos formatos (pdf, xls, html, doc, etc.) esto dio lugar a la aparición de XBRL, un lenguaje que permite el intercambio electrónico de información contable, financiera y de todo tipo. Sus ventajas se extienden eficazmente tanto a las grandes empresas como a las PYMES, analistas financieros, sector bancario y, por supuesto, a las administraciones públicas.

La sociedad actual está viviendo una revolución tecnológica que afecta a todos los sectores, tanto públicos como privados. La aparición de internet y su rápido crecimiento impulsó la creación de lenguajes estándar que permitieran la comunicación entre distintos sistemas informáticos. Como consecuencia de esto, el estándar XML se ha convertido en un lenguaje común a nivel mundial por permitir reflejar con facilidad toda la información que se desee a través de una sencilla definición de etiquetas. Uno de los derivados de este estándar es XBRL, el lenguaje para el intercambio electrónico de información contable y financiera, así como información general, que constituye uno de los mayores avances en el entorno de los negocios. Su novedad fundamental consiste en introducir los parámetros y validaciones del negocio en los datos intercambiados.

El XBRL es un formato estándar que permite intercambiar la información financiera de las entidades (por ejemplo balance, estado de resultado, flujo de efectivo, etc.) usando los mecanismos más habituales de internet como la web y el correo electrónico. Este lenguaje está definido y soportado por el Consorcio Internacional XBRL, compuesto por unas 600 compañías relacionadas con el sector tecnológico, así como con el sector financiero y contable.

XBRL permite la homogeneización de la información contable, financiera y de carácter general que se transmite electrónica-

mente y que hasta ahora sólo encontrábamos en papel o bien digitalizada en formatos heterogéneos. Asimismo, garantiza la fiabilidad del dato transmitido, pues el proceso desde que la información es enviada hasta que es almacenada en los sistemas de informáticos receptores es automático, sin necesidad de intervención manual.

Un ejemplo de utilización de XBRL puede ser la solicitud de un préstamo por parte de una PYME a una entidad financiera. Los bancos en la actualidad solicitan a las empresas que les suministren sus cuentas, éstas verifican esta información con sus bases de datos internas y con información que proviene de otros proveedores. Este trámite podría acelerar el tiempo de gestión.

Principales beneficios de XBRL en las entidades que lo utilizan:

- Inmediatez en la transmisión a los accionistas, los analistas, al mercado y a los ciudadanos en general, lo que redundará en una mayor transparencia.
- Reducción de errores, al no tener que reintroducir la información.
- Reducción de costes, con envíos habitualmente telemáticos.
- Automatización de procesos.

¿Qué es el lenguaje XBRL?

Conocido por su acrónimo XBRL (*eXtensible Business Reporting Language*), es el lenguaje, de libre uso, basado en los estándares XML (*eXtensible Mark-up Language*), que permite la interoperabilidad y análisis de cualquier tipo de información financiera, empresarial y de carácter general a través de internet. Esta sencilla idea ha conseguido atraer a toda una comunidad de profesionales y organizaciones, públicas y privadas, representando un gran número de países y coordinados en el Consorcio sin ánimo de lucro XBRL Internacional.



Esta interoperabilidad facilita el procesamiento, intercambio y publicidad de la información financiera y empresarial, permite comparar información proveniente de diferentes fuentes y formatos; reduce el riesgo de errores en la entrada manual de datos; proporciona una información precisa y fiable; es el medio apropiado para el manejo de datos por diferentes usuarios y herramientas; y, por último, reduce el coste regulatorio, pues exige un menor esfuerzo en la preparación y utilización de informes.

Los informes en XBRL ofrecen un valor agregado a las empresas que los emiten y a las administraciones públicas que lo utilizan. Un importante factor es la información asimétrica, donde una de las partes que intervienen no cuenta con la misma información. Para ello, los informes XBRL son un claro indicador de transparencia, pues demuestran que la PYME o entidades financieras se toman muy en serio proporcionar al mercado una imagen fiel de su información financiera. Esta ventaja lo ofrece precisamente el formato XBRL, por ser el adoptado por los reguladores de todo el mundo, para hacer que los informes que los reguladores reciben sean los mismos que los que las empresas publican. Además, los reguladores dedican esfuerzos a que los informes en XBRL sean entendibles en diferentes idiomas, e interoperables entre sí.

Es importante resaltar algunos de los proyectos XBRL más importantes a nivel internacional:

- *Securities and Exchange Commission* y Supervisión Bancaria (EEUU).
- Autoridad de Regulación Prudencial (Australia).
- Superintendencia de Valores y Seguros (Chile).

- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Perú).
- Supervisión Bancaria (Europa y Japón).
- Autoridad Monetaria (Bermuda).
- Proyecto de Taxonomía Nacional Holandesa (Holanda).

¿Cuál es el futuro de XBRL?

En muy poco tiempo XBRL se utilizará en más países del mundo, cualquiera que sea el idioma del país, para una amplia variedad de fines. Su empleo dará lugar a un importante ahorro en los costos y aumentos de la eficiencia en el intercambio de información; mejorando los procesos en empresas, gobiernos y otras organizaciones.



*La Inga. Norma Díaz, es Profesional II del Departamento de Tecnología de la Información. Posee Maestría en Sistemas de Información y Base de Datos de la Universidad Galileo, e Ingeniera en Ciencias y Sistemas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

**El Ing. Estuardo Herrera, es Profesional III del Departamento de Tecnología de la Información, Ingeniero en Sistemas de Información de la Universidad Mariano Gálvez.

Nuevas medidas de seguridad en tarjetas de crédito

Por: Christian Ivan Montúfar Hurtarte,*
Contador Público y Auditor

La tarjeta de crédito generalmente se asocia como un instrumento de pago, éstas, al igual que los billetes emitidos por un banco central, también poseen elementos de seguridad que tienen como fin garantizar al tarjetahabiente que las mismas no serán objeto de falsificación y fraude. Dentro de los principales elementos de seguridad que posee una tarjeta de crédito puede mencionarse la banda magnética, el panel de firma, código de seguridad, número de cuenta generalmente grabado en relieve, nombre de tarjetahabiente, plazo de vigencia, holograma, logotipo de la marca, entre otros.

Las medidas de seguridad anteriormente expuestas no han sido una limitante para el robo de información por parte de las redes de clonadores de tarjeta de crédito; este tipo de conductas delictivas, han alcanzado proporciones enormes en cuanto al perjuicio económico, en razón del alto volumen de compras que con las mismas se realiza, lo que indudablemente desincentiva la utilización de un producto que ha venido a agilizar el comercio y a ser una importante fuente de crédito de consumo.

A nivel global, *The Nilson Report*¹ estimó que las pérdidas por fraude de tarjetas alcanzaron los US\$6.89 mil millones de US\$14.6 billones de compras de bienes y servicios y disposiciones de efectivo realizados en el año 2009. Para el 2015 se estima, que la tasa de fraude global alcanzará los US\$10 mil millones.

A manera de reducir los fraudes y clonación de tarjetas de crédito, las empresas de marcas mundiales en tarjetas de crédito, han definido y recomendado utilizar tarjetas que incorporen un microcircuito o microchip y para que este mecanismo pueda ser utilizado y aceptado a nivel mundial, Europay, Mastercard y Visa (EMV²), han desarrollado un estándar de interoperabilidad, que define las características electromagnéticas y físicas de las tarjetas y los lectores, así como la interacción entre las tarjetas, los dispositivos de procesamiento de tarjetas a nivel físico, eléctrico, de datos y de aplicación. La utilización de tarjetas con microcircuitos, bajo los estándares antes mencionados, generalmente se le conoce como tarjetas EMV.

En comparación a una tarjeta con banda magnética, las tarjetas EMV presentan ventajas, tales como:

1. Mayor capacidad de almacenamiento de información que es de diez a cien veces mayor;
2. Mayor seguridad en la tarjeta, debido a que existe una verificación de la tarjeta con el emisor, la que se realiza a través de la generación de llaves criptográficas diferentes para cada transacción, esto reduce la posibilidad de falsificación;
3. Verificación del cliente, adicionalmente al requerimiento de firma, la misma puede realizarse a través del ingreso del número de identificación personal -PIN-;
4. Protegen los datos contra la modificación no autorizada; y
5. Reducen el número de transacciones fraudulentas resultantes de la falsificación, pérdida y robo de tarjetas.

Según, *Smart Card Alliance Latin America & The Caribbean*, aproximadamente mil millones de tarjetas con microcircuitos se han emitido en el mundo y 15,4 millones de terminales de puntos de venta -POS- aceptan este tipo de tarjetas.



¹ The Nilson Report es una compañía líder en el campo de la información en el sector de los medios de pago, con más de 38 años de experiencia a nivel global.

² EMVCo la organización formada en febrero de 1999 por Europay Internacional, MasterCard Internacional y Visa Internacional para administrar, mantener, y mejorar las especificaciones de Tarjetas de Circuitos Integrados EMV para Sistemas de Pago. En la actualidad EMVCo es propiedad de American Express, JCB, MasterCard Worldwide y Visa, Inc. Estas compañías han desarrollado el estándar de interoperabilidad de tarjetas con microprocesador ("Tarjetas IC"). Los sistemas de tarjeta IC basados en EMV están introduciéndose de forma escalonada en todo el mundo.



La industria de pagos de América Latina está migrando a tarjetas EMV, y con el fin de acelerar el proceso Visa Inc. y MasterCard Worldwide han establecido algunos incentivos, tales como el mandato de cambio de responsabilidad³. Países como Brasil, México, Venezuela Colombia y Perú, ya implementaron la incorporación de microchips en las tarjetas de crédito.

Para Guatemala esta migración empezó a partir de octubre de 2012, la que se basará en el ciclo de vida de la tarjeta y en las terminales de punto de venta. Para el efecto, las empresas adquirentes, ya han realizado los trabajos de personalización (adecuación) del sistema que consiste en infraestructura, tecnología, *hardware* y *software*. Desde el 2002, las terminales de punto de venta utilizadas en el país ya poseen la tecnología para leer tarjetas de crédito que incorporan microcircuitos.

Según, una de las principales empresas adquirentes en el país, a finales del presente año se requerirá a los emisores afiliados a dicha entidad, la migración de tarjetas de crédito con banda magnética a tarjetas de crédito con microcircuito. Se estima realizar una migración centralizada y controlada, contemplada en dos fases:

1. Sustitución de tarjetas con banda magnética a tarjetas con microcircuito; y
2. La autorización de transacciones será con microcircuito y no con banda magnética.

En conclusión, se estima que la implementación de estas nuevas medidas de seguridad en las tarjetas de crédito, por parte de emisores y adquirentes, permitirá incrementar la confianza de los actuales y futuros usuarios de tarjetas de crédito en Guatemala.

* El Lic. Christian Ivan Montúfar Hurtarte se desempeña como Profesional en el Área de Normativa Prudencial del Departamento de Estudios de la Superintendencia de Bancos.

³ El cambio de responsabilidad significa que en caso de un fraude ocurrido envolviendo a una tarjeta o a una terminal con chip, la responsabilidad de dicho fraude será transferida a la parte (emisor o adquirente) que no haya actualizado su dispositivo (tarjeta o terminal) con la tecnología del chip.



La Superintendencia de Bancos

Informa:

Que en virtud de lo establecido en el artículo 92 de la Ley del Registro Nacional de las Personas (RENAP) a partir del 2 de enero de 2013, el DPI será el único documento de identificación que tendrá validez para cualquier trámite que los guatemaltecos necesiten realizar.

Oficina Central:

9ª avenida 22-00, Zona 1, Guatemala
Teléfono directo: 2429-5333 - Fax: 2232-0002
P.B.X.: 2429-5000 y 2204-5300
Ext: 1200 / 1201 / 1202

**Oficina Regional de Occidente
en Quetzaltenango:**

Avenida Las Américas 7-62, zona 3,
Edificio Torre Pradera Xela, Primer Nivel,
Oficina 102, Quetzaltenango
PBX: 7930-4421 y 7930-4422

Correo electrónico: info@sib.gob.gt - www.sib.gob.gt